



Exp.: A/SER-012547/2019

De una parte, D. Francisco Javier Abajo Dávila, en calidad de Director General de Carreteras de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, nombrado por Decreto 138/2019 del Consejo de Gobierno de fecha 27 de agosto de 2019, actuando en nombre y representación de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las atribuciones que le han sido delegadas por Orden de 9 de septiembre de 2019 del Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras.

De otra parte, D. Andrés Mochales Blasco con D.N.I. 00279149K, actuando en nombre y representación de SIMMONS & Simmons, LLP; NIF: N8261155I, con domicilio en C/ Almagro, 26, 6º A, 28010 Madrid, en virtud de las facultades que le confiere la escritura de establecimiento de sucursal de sociedad, autorizada por el Notario del Ilustre Colegio de Madrid D Carlos Ruiz-Rivas Hernando, el día 23 de abril de 2010, con el número 995 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente para formalizar el presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares de este contrato titulado ESTUDIO DE REEQUILIBRIO ECONÓMICO FINANCIERO DEL TRAMO I DE LA CARRETERA M-45, fueron aprobados por Orden del Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de fecha 20 de septiembre de 2019, para su adjudicación por procedimiento abierto simplificado.

SEGUNDO.- La contracción del crédito presupuestario correspondiente, por un importe de 75.507,75 euros, se efectuó con cargo a:

<u>Programa</u>	<u>Económica</u>
453 A	22706

El gasto se aprobó por el órgano competente con fecha 20 de septiembre de 2019 previa la fiscalización por la Intervención de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de septiembre de 2019.

TERCERO.- La adjudicación del contrato se acordó mediante Orden del Consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de fecha 30 de diciembre de 2019.

CUARTO.- Con fecha 27 de diciembre de 2019 se fiscalizó la disposición del gasto por la Intervención.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- D. Andrés Mochales Blasco, en nombre y representación de SIMMONS & SIMMONS, LLP se compromete a llevar a cabo la ejecución de este contrato titulado ESTUDIO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCIERO DEL TRAMO I DE LA CARRETERA M-45, que tiene por objeto la elaboración del estudio de reequilibrio económico-financiero del tramo I de la carretera M-45 y del informe de contestación a las alegaciones y pruebas presentadas en el correspondiente procedimiento de reequilibrio con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas Particulares, documentos que acepta plenamente, de lo que deja constancia mediante la firma del presente contrato.

SEGUNDA.- El precio de este contrato asciende a:

<u>Base imponible</u>	<u>IVA</u>	<u>Importe total</u>
46.178,29 euros	9.697,44 euros	55.875,73 euros

Se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

<u>Anualidad</u>	<u>Importe</u>
2019	0,00 €
2020	55.875,73 €

La Comunidad de Madrid abonará el precio mediante pagos parciales. El contratista tendrá derecho al abono de las prestaciones realizadas una vez recepcionadas, reconocidas y comprobadas por el Jefe de División de Concesiones, según los precios unitarios recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas afectados por el coeficiente de adjudicación del contrato.

TERCERA.- El contratista se obliga a cumplir el contrato en el plazo total de 107 días desde el día siguiente a la formalización contractual.

Plazos Parciales:

- Sesenta y dos (62) días, plazo ofertado, para efectuar entrega del estudio definitivo de reequilibrio objeto del contrato.
- Quince (15) días para efectuar la entrega del informe a las alegaciones y pruebas que presente la sociedad concesionaria, a contar desde el requerimiento del informe por la Administración. El requerimiento se llevará a cabo en el plazo máximo de un mes desde la recepción del Estudio.

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En su defecto se aplicarán las previstas en el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

El plazo de garantía del contrato se establece en doce meses, a contar desde la fecha de recepción o conformidad de los trabajos.

CUARTA.- Para responder del cumplimiento de este contrato el adjudicatario ha constituido garantía definitiva por importe de 2.308,91 euros, en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, según acredita con resguardo número 201955005879Y, de fecha 4 de diciembre de 2019.

QUINTA.- Revisión de precios: no procede de conformidad a lo dispuesto en artículo 103 de la LCSP,



en relación con lo indicado en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

SEXTA.- Son causas de resolución del contrato además de las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la LCSP, las establecidas en la cláusula “*Resolución del contrato*” de Pliego de Cláusulas administrativas Particulares.

SÉPTIMA.- La empresa contratista tiene la obligación de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

OCTAVA.- Este contrato tiene carácter administrativo y ambas partes quedan sometidas a lo estipulado en el mismo así como a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas particulares, así como a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Para lo no previsto en éstos regirán las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y del Reglamento General de Contratación pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril, en lo que no se opongan a la Ley de Contratos del Sector Público; y demás disposiciones reglamentarias aplicables en materia de contratación administrativa. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado

Cuantas controversias o litigios surgieran como consecuencia de la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato se entenderán siempre sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Contencioso-Administrativos competentes con sede en Madrid.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato.

POR LA ADMINISTRACIÓN,

EL CONTRATISTA,